



FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

*Carlos Zeppelin_vicepresidente CChC
Cámara Chilena de la Construcción*

Según un catastro de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 37 proyectos ejecutados en el país están en riesgo de sufrir retrasos o derechamente ser suspendidos. Todos tienen como común denominador el aumento en el precio de los materiales, los cambios en el escenario económico -inflación mediante- y los efectos de la pandemia que estresó los stocks en todo el mundo.

El análisis de costos está ya internalizado: en promedio, los precios de los materiales aumentaron en 30% después de la pandemia, lo que tiene efectos directos en el costo de construcción, tanto en edificación como en obras civiles.

En el caso de los proyectos de infraestructura pública, la situación se ve aún más agravada ante la falta de disposición de los mandantes de compensar estos mayores costos. Varias empresas contratistas están intentando avanzar en los proyectos, muchos de los cuales van en beneficio directo de las comunidades: centros de salud, comisarías de Carabineros, cuarteles de la PDI, establecimientos educacionales, centros de atención para niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

Según los cálculos, esos proyectos contemplan inversiones por cerca de 600 millones de dólares. Ciertamente, no todo ese monto está en riesgo, pero sí una suma importante. Más allá de las cifras, la

situación concreta es que se pone en juego el bienestar de la ciudadanía, destruyendo anhelos de conectividad, seguridad y acceso a servicios, entre otros aspectos.

Analizar estas situaciones caso a caso, es eso: analizar cómo cada obra retrasada rompe el sueño de tener un mejor entorno.

El costo que debe asumir el Estado al relucitar proyectos abandonados por quiebra o insolvencia, es alto. Volver a licitar un proyecto resulta casi siempre en el doble del valor inicial por el que comenzó a ser ejecutado. Ello sucede sin considerar la demora en la entrega y la consecuente frustración que produce en las comunidades que se benefician de estas obras.

En momentos excepcionales, como los que nos deja la pandemia por el Covid-19, es probable que las fórmulas de salida también sean excepcionales. Revisar los contratos, ajustar sus valores a precio fijo y mejorar nuestras relaciones contractuales pueden ser salidas efectivas para no afectar el desarrollo del país.

Elevar las condiciones de vida de la ciudadanía tiene una directa relación con la disponibilidad de infraestructura, con servicios eficientes para la comunidad. Eso lo tenemos claro. Ahora queda abordar cómo seguir en una línea de beneficio para todos, con la contribución de los distintos actores.